

OPINIÓN

¿Quién le pone el cascabel al gato?



Allan Mix, presidente Sociedad de Medicina de Urgencia

En los últimos años, hospitales y centros de salud se han convertido en escenarios recurrentes de violencia. Lo que debería ser un espacio seguro para el cuidado y la recuperación de la salud, enfrenta a diario amenazas que comprometen su funcionamiento y la integridad de quienes trabajan allí, así como de los pacientes.

La Urgencia del Hospital Padre Hurtado, en la zona sur de Santiago, estuvo paralizada unos días por graves hechos de violencia de los últimos meses. A fin de año, un tiroteo dejó a dos enfermeras heridas con perdigones. La consigna de los trabajadores, “menos balas, más seguridad”, no puede seguir siendo ignorada.

Este no es un caso aislado. Días antes, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Los Quillayes sufrió dos ataques consecutivos, que dejaron daños materiales y detuvieron la atención a la comunidad. Desde agresiones verbales hasta ataques físicos, el personal de salud enfrenta un entorno laboral cada vez más hostil, que afecta su salud mental y física. Las consecuencias no se limitan al equipo sanitario; también los pacientes ven interrumpida su atención en momentos críticos.

¿Quién se hace cargo? ¿Cuánto más podemos tolerar que los hospitales se transformen en campos de batalla? Es urgente implementar un enfoque integral, que combine medidas de seguridad efectivas, protocolos estrictos y una revalorización del rol del personal sanitario. Esto incluye rigurosos controles de acceso, refuerzo de la presencia de seguridad y campañas educativas para sensibilizar sobre la importancia de respetar estos espacios vitales.

El Estado y las instituciones tienen el deber de garantizar un entorno laboral digno y seguro para los trabajadores de la salud. Las palabras de apoyo son insuficientes, mientras la inseguridad se suma al agotamiento mental y físico de quienes deben interactuar directamente con los agresores. Se necesita una acción concreta que respalde a los que, en medio de esta crisis, continúan trabajando con profesionalismo y vocación. La violencia no puede normalizarse.

El sistema de salud pública está en riesgo vital. La inacción no sólo pone en peligro la integridad de los profesionales, sino también la esencia misma de un sistema que, pese a sus falencias, sigue siendo un pilar fundamental para millones de chilenos. Es hora de que autoridades, instituciones y sociedad civil asuman su responsabilidad y trabajen en conjunto para poner fin a esta alarmante situación.